

Asunto: Acción de Inconstitucionalidad

Pomoviente: Miguel Óscar Sabido Santana
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán a 22 de agosto de 2022

H. MINISTROS QUE INTEGRAN EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El que suscribe, **Mtro. Miguel Óscar Sabido Santana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán**, personalidad que se acredita con la copia debidamente certificada del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho; señalando como domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el predio marcado con el número setenta y dos de la calle veintisiete con cruzamiento en calle ocho y calle diez de la colonia México de la ciudad de Mérida, Yucatán; asimismo, se solicita que las notificaciones que se realicen en el presente procedimiento se hagan por medio de lista; en tal virtud con el debido respeto comparezco y expongo:

De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estando dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del precepto constitucional y fracción citados, así como del numeral 60 de la Ley Reglamentaria antes citados, promuevo ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha 21 de julio de 2022.

En tal sentido, y en acatamiento de lo expresado en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria que regula este procedimiento, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente:

I.- NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE:

MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

II.- LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS QUE EMITIERON Y PROMULGARON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS:

A.- Órgano Legislativo: H. Congreso del Estado de Yucatán.

B.- Órgano Ejecutivo: Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán.

III.- LAS NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ:

Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha 21 de julio de 2022, el cual puede ser consultado en 2022-07-21_2.pdf (yucatan.gob.mx)

IV.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

- Artículos 1, 14, 16 y 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

- Artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Artículos 2, 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Artículos 1, 2, 17, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Artículos 1, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS:

- Derecho al Desarrollo Progresivo.
- Derecho a la Seguridad Social.
- Obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos.
- Deber del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno.
- Derecho de Protección a la Familia

V.- COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por la fracción II inciso g) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha 21 de julio de 2022.

VI.- OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN:

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la norma impugnada.

En el caso, la norma cuya declaración de invalidez se solicita, fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día 21 de julio de 2022, por lo que el plazo corre desde el día viernes 22 de julio de 2022 al día sábado 20 de agosto de 2022, sin embargo, tal como señala el artículo 60 de la citada ley de la materia este plazo se corre hasta el día 22 de agosto del año 2022, al ser el primer día hábil siguiente.

Por tanto, al promoverse el día 22 de agosto de 2022 ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción es oportuna.

VII.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

El artículo 105 fracción II inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas tienen atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que México es parte, respecto de las leyes expedidas por las legislaturas de la entidad a la que pertenezca el organismo protector de derechos humanos, en los siguientes términos:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; (...).

Conforme al citado precepto Constitucional acudo a este Alto Tribunal en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en los términos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad, conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal.

Dicha representación y facultades, se encuentran previstas en el artículo 18 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, preceptos que, por su relevancia, a continuación, se citan:

De la Ley:

“Artículo 18. Facultades y obligaciones del presidente de la comisión El presidente de la comisión tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Ejercer la representación legal de la comisión. (...)

IV. Suscribir los escritos relativos a las acciones de inconstitucionalidad contra de leyes expedidas por el Congreso, para su presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (...).”

Del Reglamento Interno:

“ARTÍCULO 18.- El Presidente(a) es la máxima autoridad de la Comisión y a él o ella corresponde realizar, en los términos establecidos en la Ley y en este Reglamento, las funciones directivas del organismo, del cual es su representante legal.”

VIII.- CONCEPTOS DE INVALIDEZ:

PRIMERO: LA NORMA IMPUGNADA VIOLA EL DERECHO AL DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 1 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEJANDO DE OBSERVAR LA OBLIGACIÓN DE NO REGRESIVIDAD Y DE NO DISMINUCIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL. ASIMISMO, NO SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR UNA MOTIVACIÓN REFORZADA AL AFECTAR UN DERECHO HUMANO COMO ES LA SEGURIDAD SOCIAL.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo prevé en su artículo 1º,¹ la obligación constitucional del Estado de garantizar los derechos

¹ **“Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

humanos, lo cual no se cumple de manera simple y llana sino que debe realizarse bajo el principio de progresividad; es decir, cumpliendo con los mecanismos para su efectivo goce y disfrute, con el compromiso de que mediante la actuación estatal **no se empeore, disminuya, ni constituya un retroceso o una desmejora en el contenido de los derechos humanos.**

Por tanto, toda reforma, actualización o creación de una norma no puede, en virtud del principio de progresividad, disminuir o empeorar el contenido de los derechos humanos y las garantías para su efectivo goce y ejercicio.

En este sentido, en el Decreto 532/2022 publicado en versión vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 21 de julio del año en curso, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán que se impugna, solo se preservaron los derechos de las personas que actualmente gozan de una pensión por sus años de servicio, por invalidez o que han llegado a la edad de 55 años y con un mínimo de 15 años de cotización al Instituto de Seguridad Social del Estado de Yucatán (Instituto); y por el contrario, plantean un detrimento en el derecho a la seguridad social para los trabajadores a quienes se les denominó en transición y a los de nuevo ingreso.

Para los trabajadores que la ley denomina en “transición” conforme los artículos transitorios sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto del decreto que se impugna, se estableció un régimen regresivo, en virtud de lo siguiente:

1. De manera gradual, año con año, su porcentaje de aportación será incrementado. Los artículos transitorios establecen de un 8% con incrementos de hasta el 15% para el año 2029 en adelante.
2. La Pensión por Jubilación de las personas servidoras públicas en transición, incrementa los años de servicio, bajo un esquema de salario regulador.
3. La pensión por vejez, previó que los servidores públicos en transición que, teniendo 15 años de servicio, puedan acceder a este derecho bajo un esquema de acuerdo al año que les falte por cotizar la pensión o jubilación conforme la ley que se abroga.
4. La pensión por vejez se calculará multiplicando el salario regulador por una tabla de factores que establecen reductores que se presentan del 0.50 al 1.00 de acuerdo a los años cotizados; esto, estableciendo una base mínima de 15 años hasta los 30 años o más.
5. La pensión por retiro anticipado por edad avanzada considera descuentos o reducciones en un 5% del monto de acuerdo al salario regulador por cada año que le falte para cumplir con la edad de jubilación, a partir de que el trabajador cuente con edad de 60 años y un mínimo de 20 años cotizados.
6. El régimen transitorio relativo a las denominadas “servidores públicos en transición”, determina que para el caso de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo aplicables a salarios reguladores tasados por factores de acuerdo a los años trabajados, son considerados en un mínimo de 5 años y hasta más de 30 años de cotización al Instituto para poder calcular la pensión por invalidez no imputable a causas de su trabajo.
7. El seguro de cesantía o separación establece que las personas que se separen de sus trabajos por la edad, ya sea por renuncia, o por despido, y no alcancen a pensionarse, podrán retirar sus aportaciones, pero solamente por un porcentaje del 15% de las aportaciones hechas por el servidor público, sin ninguna otra prestación.

En general, la ley que se tilda de inconstitucional aumenta los años de edad y de servicio a de las personas servidoras públicas, pues de considerar, los 55 años de edad en el caso de las mujeres y de 60 años en caso de los hombres y en ambos casos, 30 años de cotización antes previstos, ahora se establecen 65 años de edad y 35 años de cotización, sin diferenciación por género. Por su parte, las jubilaciones nuevas para los servidores públicos en transición, habrán de fijarse con base a un salario regulador que disminuye el ingreso salarial; de esta manera, la regresividad manifestada, se visualiza en principio, con el aumento considerable tanto en los años de edad como en los años de servicio que tienen que acreditarse y la disminución del ingreso que se percibirá al momento de su jubilación.

Además, como se mencionó en el párrafo que antecede, las jubilaciones habrán de fijarse con base a un salario regulador que disminuye el ingreso salarial, por tanto, perjudica a quienes durante toda su vida laboral fueron pagados con base al salario diario y sus incrementos respecto al salario mínimo general vigente; en

personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (...)

tanto en la norma que se impugna, se accede a partir de los 20 años de cotización y, como requisito, se debe contar con 65 años de edad; además en la norma vigente, se accede a partir de los 15 años de cotización y como requisitos contar con 60 años de edad.

Asimismo, hay una clara regresividad en la manera en que la ley impugnada pretende fijar la pensión de las personas servidoras públicas, pues anteriormente, se consideraba el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba, mientras que ahora se considerará el 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador, esta cuestión, no únicamente de principio ya priva a la persona servidora pública de un 15% de su salario al momento de su jubilación, sino que en caso de que haya podido acceder a un puesto de alto rango con un salario más remunerador casi al final de su vida como trabajador activo; esto no se reflejará en gran proporción en la pensión que reciba, en virtud de que por el cambio efectuado en la normativa, en lugar de recibir lo respectivo por los dos años anteriores a su jubilación, se considerarán los últimos veinte años laborados, lo que indudablemente mermará en la cantidad final que se fije en la pensión; y por consiguiente en su proyecto de vida.

De lo señalado, se puede ejemplificar de la manera siguiente:

Si una persona trabajadora durante sus últimos veinte años laborados previos a su jubilación, recibía una remuneración de \$10,000 (son diez mil pesos sin centavos, moneda nacional) mensuales durante quince años, mientras que los últimos cinco años percibía la cantidad de \$30,000 (son treinta mil pesos sin centavos, moneda nacional) mensuales; en tal sentido, y aplicando la fórmula prevista en la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán vigente; es decir aplicar el 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años laborados, se tiene que de los primeros quince años, la cantidad cotizada serían \$1,800,000 (son un millón ochocientos mil pesos sin centavos, moneda nacional), y de los últimos cinco años, la cantidad es de \$1,800,000 (son un millón ochocientos mil pesos sin centavos, moneda nacional); ahora bien, la sumatoria total nos daría \$3,600,000 (son tres millones seiscientos mil pesos sin centavos, moneda nacional), por tanto, el promedio de esos veinte años sería la cantidad de \$15,000 (son quince mil pesos sin centavos, moneda nacional), sin embargo aún hay que deducir el 15%, quedando así un total de \$12,750 (son doce mil setecientos cincuenta pesos sin centavo, moneda nacional), cantidad que sería totalmente distinta si se aplicará la normativa que se abrogó, porque la pensión se fijaba con base en el promedio de los últimos dos años laborados, siendo que si se siguiera aplicando esa normativa, la pensión no sería de \$12,750 sino que esta ascendería alrededor de los \$30,000 (son treinta mil pesos sin centavos, moneda nacional); lo que demuestra claramente la regresividad que se ha tenido en materia de seguridad social en el Estado.

En cuanto a los beneficiarios familiares de aquel trabajador que fallezca por causas ajenas al denominado riesgo de trabajo, la ley vigente determina que el Instituto, le otorgará una pensión por fallecimiento a sus beneficiarios, misma que, previo a calcularse mediante el salario regulador y factores, del total, se contemplará una disminución anual con un tope a los 6 años, lo cual tasa una disminución hasta del 50% de la pensión otorgada, esta situación se torna alarmante en virtud de que la normativa anterior, es decir, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, abrogada, no contemplaba disminución alguna en la pensión otorgada a los familiares de la persona trabajadora fallecida, lo cual se verifica del análisis de la normativa en comento, y en particular del capítulo octavo, que trata sobre las jubilaciones y pensiones.

En la nueva ley, a manera de sustituir el salario diario, se ha creado una tasa reguladora sobre el ingreso laboral del servidor público; en el entendido que, al insertar la figura jurídica del salario regulador, los ingresos a calcular para los nuevos servidores públicos y los denominados en transición, tendrán un máximo porcentaje del 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que se

recibieron por la persona servidora pública durante su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional antes mencionado. El legislador lo estableció a fin de evitar sueldos desmedidos, sin embargo, su construcción legislativa es completamente desproporcional e incomprensible, hecho que lo torna inconstitucional.

Para los trabajadores denominados en transición, se le establecen tablas que van del 100% al 90% dependiendo de los años que les faltaren para poder acceder a una pensión al amparo de la ley que se abroga, sin argumentar los criterios de su decisión. En cuanto a los conceptos de riesgos de trabajo, se considera que existen medidas regresivas, ya que, en caso de una incapacidad permanente total, la pensión a estimar se determina con base al Salario Regulador, en un momento en que la sola necesidad de una incapacidad presupone una vulnerabilidad del servidor público.

A mayor abundamiento de lo anteriormente manifestado, en forma gráfica, se puede observar en la tabla siguiente:

INCREMENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN EMITIDA MEDIANTE EL DECRETO 532/2022 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EN FECHA VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS Y QUE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS.

INCREMENTO EN LAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES – PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
CUOTA DEL 8% - SIENDO 2% DESTINADO PARA SEGURO, ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y EL 6% RESTANTE PARA LAS DEMAS PRESTACIONES	CUOTA DEL 15% - SIENDO EL 13% PARA EL FONDO DE PENSIONES Y 2% PARA FONDO DE SERVICIO MÉDICO

INCREMENTO EN LAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES – ENTIDADES PÚBLICAS

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
APORTACION 13.75% - SIENDO EL 6% PARA EL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, 0.75% PARA EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO Y 7% PARA DEMAS PRESTACIONES	APORTACIÓN 21.75% - SIENDO 15.75% PARA EL FONDO DE PENSIONES Y 6% PARA EL FONDO DE SERVICIO MÉDICO

INCREMENTO EN LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
55 AÑOS DE EDAD Y 15 O MÁS AÑOS DE APORTACIONES	65 AÑOS Y 35 AÑOS DE SERVICIO

INCREMENTO EN LA PENSIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
30 AÑOS DE APORTACIONES SIN LIMITE DE EDAD	60 AÑOS Y 35 AÑOS DE COTIZACIÓN

TOPE DE SALARIO DE COTIZACIÓN MENSUAL

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
LA CUOTA DIARIA NO PODRÁ SER MAYOR DE 8 VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE A LA FECHA DE JUBILACIÓN	NO PODRÁ SER MENOR AL SALARIO MINIMO GENERAL NI MAYOR A \$43,876.35 CANTIDAD QUE SERÁ ACTUALIZADA DE MANERA ANUAL CON EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS DE CONSUMIDOR

SALARIO REGULADOR

LEY ABROGADA	LEY VIGENTE
PROMEDIO MENSUAL DE TODAS LAS PERCEPCIONES COMPUTABLES A LOS 2 AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA BAJA	85% DEL PROMEDIO PONDERADO DE SALARIOS DE COTIZACIÓN QUE PERCIBIO LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA DURANTE LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS DE SU VIDA ACTIVA

Como puede observarse, si de alguna manera, la reforma pretende modificar derechos humanos, entonces estos podrían ser modificados preferentemente para ser mejorados, aumentados o desarrollados, pero nunca para empeorarlos o disminuirlos; lo anterior, en relación a los términos del decreto abrogado. De esta manera, se violenta la obligación positiva de actuar para desarrollar y mejorar el contenido de los derechos constitucionales, y de garantizar su efectividad; pues por el contrario, lo que si es **progresivo en perjuicio del servidor público, es que año con año, trabajadores al servicio del Estado aumenten el pago de las aportaciones en concepto de seguridad social, considerando además, la variable que anteponen al Índice Nacional de Precios al Consumidor, como se aprecia en la tabla siguiente:**

CUESTIONES TRANSITORIAS

SALARIO REGULADOR DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN (SÉPTIMO TRANSITORIO)

AÑOS QUE FALTAN PARA CUMPLIR 30 AÑOS DE COTIZACION AL MOMENTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY	NÚMERO DE MESES A PROMEDIAR	PORCENTAJE
0	24	100%
1 Y 2	24	95%
3 Y 4	36	93%
5 Y 6	48	91%
7 O MÁS	60	90%

CUOTA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN (OCTAVO TRANSITORIO)

AÑO	PORCENTAJE
2022	6%
2023	7%
2024	8%
2025	9%
2026	10%
2027	11%
2028	12%
2029 EN ADELANTE	13%

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN (NOVENO TRANSITORIO)

AÑO	PORCENTAJE
2022	7.75%
2023	8.75%
2024	9.75%
2025	10.75%
2026	11.75%
2027	12.75%
2028	14.75%
2029 EN ADELANTE	15.75%

PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN (DÉCIMO TRANSITORIO)

AÑOS QUE FALTAN PARA CUMPLIR 30 AÑOS DE COTIZACION AL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY	ANTIGÜEDAD REQUERIDA
0 Y 1	30

2 Y 3	31
4 Y 5	32
6 Y 7	33
8 Y 9	34
10 O MÁS	35

PENSIÓN POR VEJEZ DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN (DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO)

AÑO	EDAD REQUERIDA
2022-2023	55
2024-2025	56
2026-2027	57
2028-2029	58
2030-2031	59
2032-2033	60
2034-2035	61
2036-2037	62
2038-2039	63
2040-2041	64
2042 O POSTERIOR	65

MONTO DE LA PENSIÓN EN RELACION CON LA TABLA ANTERIOR

AÑOS COTIZACION	DE	FACTOR D	AÑOS COTIZACION	DE	FACTOR D
15		0.5000	23		0.7550
16		0.5300	24		0.7900
17		0.5600	25		0.8250
18		0.5900	26		0.8600
19		0.6200	27		0.8950
20		0.6500	28		0.9300
21		0.6800	29		0.9650
22		0.7200	30 O MAS		1.0000

PENSIÓN POR INVALIDEZ POR CAUSAS AJENAS AL TRABAJO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN TRANSICIÓN

AÑOS COTIZACION	DE	FACTOR E	AÑOS COTIZACION	DE	FACTOR E
5 A 15		0.5000	23		0.7550
16		0.5300	24		0.7900
17		0.5600	25		0.8250
18		0.5900	26		0.8600
19		0.6200	27		0.8950
20		0.6500	28		0.9300
21		0.6800	29		0.9650
22		0.7200	30 O MAS		1.0000

Aunado a lo anterior, ni en el dictamen, ni en el decreto, se establecen los razonamientos del legislador local, para tomar decisiones sobre medidas regresivas, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que se transcribe en forma textual:

“Registro digital: 2019325 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 980 Tipo: Jurisprudencia

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura

*económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, **incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. (lo resaltado es nuestro)***"

En tal sentido, la progresividad como derecho establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados; por su parte, el artículo 29 inciso b) del mismo ordenamiento citado en congruencia con el artículo 1 de la Constitución General, prevé el principio de interpretación *pro personae*, que establece que ninguna de sus disposiciones pueden ser interpretadas en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados parte o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados, o bien, tendría que optarse por aplicar el que mejor le favorezca al goce y ejercicio de sus derechos humanos. El mismo principio está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en su artículo 5, punto 2.

En este mismo sentido, se expresan los principios de progresividad y prohomine, conforme la exposición de motivos de la reforma al artículo 1º constitucional de fecha diez de junio del año dos mil once, los cuales propugnan por la aplicación preferente de aquel ordenamiento que mejor tutele los derechos humanos; esto es, se debe aplicar la disposición más favorable a las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento que en mejor forma, garantice el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, lo que lleva a una interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos humanos, lo que en el caso que nos ocupa, refiere a la norma abrogada.

Ahora bien, por su importancia, es dable mencionar también que los doctrinarios Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, en la página 25 de su obra "Los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad para su Aplicación Práctica", consultada en la Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, exponen que este principio de progresividad patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar; posteriormente, en la página 28, mencionan que correlacionado con el principio de progresividad, está el de prohibición de regresividad, el cual dispone que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado, mismo principio que debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y en general, en toda conducta estatal que afecte derechos; se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales, es decir, abundan que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida perjudica el derecho y, en su caso, cómo lo amplía; concluyen diciendo que de disminuir su alcance en alguna forma, se está frente a una regresión prohibida.

Es de suma importancia, manifestar que la progresividad incide precisamente en el avance o progreso en la tutela y protección de los derechos humanos que permitan a los individuos alcanzar su realización plena, o al menos confieran las condiciones idóneas para ese fin.

La progresividad se puede medir en la cobertura de la población que disfruta de un derecho, así como tomando en consideración la igualdad social, por lo que la legislación que se impugna como violatoria de derechos humanos, al restringir los derechos con medidas de naturaleza legislativa, disminuye la cobertura de protección de una población, que en este caso, resultan los servidores públicos del estado de Yucatán, sobre todo, los denominados en transición, y derivado de ella, causa afectación debido a la interdependencia con otros derechos humanos, como el de un mínimo vital y al de protección de la familia,² por tanto, debe ser considerada inconstitucional, inconvencional y violatoria de derechos humanos.

En abono de lo expuesto, y en virtud de su trascendencia a la eficacia de los derechos humanos se encuentra sometida al principio de progresividad, el cual se erige en un valladar constitucional que a la vez de exigir a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales, también les impide como principio general, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos de las personas que se someten al orden jurídico del Estado Mexicano.

Asimismo, conforme la observación número 3 del Comité del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,³ se considera que para que una medida sea justificada, el estado debe probar que:

a) La Legislación que propone pese a un retroceso, implica un avance teniendo en cuenta, los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y

b) Que ha empleado todos los recursos de que dispone, y que requiere acudir a ella para proteger los demás derechos.

En cuanto a la justificación de la limitación de los recursos económicos, el Comité DESC emitió una evaluación en 2007, que establece que cuando el estado decide adoptar una medida regresiva aduciendo la falta o disminución de recursos, debe considerar, lo siguiente:

1. El nivel de desarrollo del Estado en cuestión;
2. La severidad de la supuesta violación, en particular, la situación del disfrute del contenido esencial de los derechos considerados en el Pacto;
3. La situación económica en la que se encuentra el Estado parte, en especial, si se está experimentando un periodo de recesión económica;
4. La existencia de otras necesidades importantes que el Estado debe satisfacer con los recursos limitados que dispone;
5. Si el Estado trató de encontrar opciones de mejor costo, y
6. Si el Estado recabó la cooperación y asistencia internacional o rechazó las ofertas de recursos de la comunidad internacional.

En este mismo, sentido, se expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que debe existir una motivación reforzada cuando se trate de una legislación que afecte un derecho fundamental, que en este caso, es la seguridad social y el derecho humano al trabajo de los servidores públicos; al respecto, el legislador no realizó ningún test que justifique medidas regresivas, analizando la posibilidad de realizar ajustes razonables en otros rubros del gasto público, y en general, no se observa un análisis mediante el cual pondere o justifique la necesidad e idoneidad de las medidas aprobadas.

² Convención Americana sobre Derechos Humanos. "**Artículo 17. Protección a la Familia.** 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (...)"

Sirve de sustento la jurisprudencia que se transcribe en forma textual:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 165745, Instancia: Pleno, Novena Época Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 120/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1255, Tipo: Jurisprudencia.

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. **La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.** Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma."

(LO RESALTADO ES NUESTRO)

Por todo lo anteriormente manifestado, cabe agregar que en concordancia con el principio de progresividad, tratándose de reglas restrictivas de los derechos humanos, su interpretación debe hacerse con base en una orientación estricta para que esa limitación sea la mínima posible, por lo que la promoción de la presente acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, al afectar el derecho a la seguridad social y los derechos interrelacionados con éste, **no pueden disminuir los niveles de acceso y disfrute contemplados con anterioridad a la expedición de esta nueva ley, toda vez que implica una restricción que no encuentra justificación en la salvaguarda de algún otro derecho fundamental.**

Esta postura resulta congruente con la progresividad de los derechos humanos, en virtud de la interdependencia existente entre los mismos, ya que el afán de hacerlos evolucionar de la manera más satisfactoria posible no puede

implicar que la protección de un derecho conlleve la negación o disminución de otro, por lo que debe encontrarse un equilibrio cuando pueda aparecer una confrontación de esa naturaleza, se debe realizar la ponderación funcional en beneficio de ambos derechos. Tal situación, es la única que en un momento determinado puede inhibir la progresividad de los derechos humanos; por tanto, la evolución de los mismos necesariamente debe orientarse, de inicio, a un avance o ampliación de los horizontes de tutela.

A partir de las razones jurídicas expuestas, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán impugnada, no respeta el principio de progresividad y razonabilidad jurídica, que se desprenden del artículo 1° de la Constitución Federal, así como de los derechos y artículos citados en el proemio del presente ocurso.

SEGUNDO: LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CAUSA VIOLACIONES A OTROS DERECHOS COMO A UN MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA DEBIDO A LA INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La familia para la comunidad internacional, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección y del Estado, tal como se ha reconocido en diferentes instrumentos internacionales como regionales, siendo tal la importancia que se le otorga en este ámbito, que está consagrada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala la libertad, la justicia y la paz en el mundo que tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

En tal sentido, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. También hacen referencia, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de San Salvador, así como la Convención de Belém do Pará. Lo anterior, es especialmente relevante en relación con las familias en situación de pobreza, pues las condiciones de pobreza pueden generar restricciones o exclusiones que limitan el ejercicio de los derechos de las personas en condición más vulnerable, como resulta de la edad o discapacidad; por tales motivos, se requiere el apoyo del Estado para posibilitar el ejercicio de los derechos humanos de quienes la integran.

Esto tiene especial relación con los derechos de seguridad social, cuando las prestaciones como lo son las jubilaciones y pensiones, sustituyen al salario cuando la persona trabajadora ya no está laboralmente activa, y los ingresos derivados de estos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón, se trata de la protección de los derechos adquiridos por la persona trabajadora, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano.

Sirve de sustento la tesis aislada siguiente:

Registro digital: 172545, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. XCVII/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 793, Tipo: Aislada, DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.

El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo

vital es un presupuesto sin el cual las coordinadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean.

Por tales motivos, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán vigente, resulta violatoria de estos derechos, aunado a que en vista de que en el artículo 125 de la citada normativa, se prevé, el derecho a las pensiones por fallecimiento, el cual establece que las personas beneficiarias por la muerte de una persona fallecida,⁴ tendrán derecho a una pensión cuyo monto será igual a un porcentaje de la pensión que recibía el titular, actualizada conforme la tabla siguiente:

AÑOS DISFRUTANDO DE PENSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE DE LA PENSIÓN QUE RECIBÍA EL TITULAR (ACTUALIZADA)
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6 en adelante	50%

Lo anterior, evidencia la regresión que se tiene en el reconocimiento del derecho de pensión por fallecimiento, puesto que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diez de septiembre del año mil novecientos noventa y seis, abrogada, no preveía en ninguno de sus artículos la disminución de la pensión otorgada a la persona beneficiaria por fallecimiento de alguna persona trabajadora, servidora pública, situación que si se prevé en la norma impugnada, tal como puede apreciarse en la tabla que precede, ya que en un periodo de 6 años se pierde hasta el 50% del monto estipulado para la pensión otorgada. Cabe mencionar, que va acorde al monto que recibía la persona titular, lo anterior se traduce que en caso de que la persona fallecida tuviera el 80% de pensión conforme a su salario, la persona beneficiaria de esta pensión a lo largo de los 6 años, únicamente estaría recibiendo el 40% del monto total de la pensión, pues lo anterior equivaldría al 50% de reducción sobre el monto otorgado.

Si pensamos que la persona fallecida tuviere hijas e hijos menores de edad o un cónyuge o dependiente económico mayor de edad, o con alguna discapacidad estaríamos pensando en una afectación a una persona en situación de vulnerabilidad, que atenta a que su familia cuente con las condiciones de un mínimo vital.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado⁵ con base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, que las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la pensión son las siguientes:

- El derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal para ello y los requisitos establecidos en la normativa nacional, para lo cual deberá existir un sistema de seguridad social que funcione y garantice las prestaciones, el cual deberá ser administrado, supervisado y fiscalizado por el Estado.

⁴ Según lo establecido por el artículo 128 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el cual señala las reglas para las personas beneficiarias.

⁵ Corte IDH. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375. Párrafo 192.

- El garantizar que las prestaciones sean suficientes en importe y duración, que permitan al jubilado gozar de condiciones de vida adecuadas y de acceso suficiente a la atención de salud, sin discriminación.
- Debe haber accesibilidad para obtener una pensión, es decir que se deberán brindar condiciones razonables, proporcionadas y transparentes para acceder a ella. Asimismo, los costos de las cotizaciones deben ser asequibles y los beneficiarios deben recibir información sobre el derecho de manera clara y transparente.
- Las prestaciones por pensión de jubilación deben ser garantizadas de manera oportuna y sin demoras, tomando en consideración la importancia de este criterio en personas mayores.
- Se debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una violación del derecho a la seguridad social, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, lo cual abarca también, **la concretización material del derecho a través de la ejecución efectiva de decisiones favorables dictadas a nivel interno.**

Además, la Corte Interamericana ha considerado⁶ que la reducción de los recursos económicos en relación con la pensión genera un menoscabo en la dignidad, principalmente en las personas mayores, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales del ser humano, además de que genera en las personas angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto a su futuro por la falta de recursos económicos para su subsistencia, y conlleva intrínsecamente a la afectación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana ha reiterado⁷ que el artículo 45 de la Carta de la Organización de Estados Americanos interpretado a la luz de la Declaración Americana y de los demás instrumentos mencionados, se pueden derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona por lo que deben adoptarse medidas para protegerla.

Por tanto, el derecho a la seguridad social busca proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado o al menos garantizarse un mínimo vital; lo que a su vez, podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último, también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal, que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso.

Por lo anteriormente señalado, y tal como ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante⁸, mediante la cual ha considerado que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección de la seguridad social, incluyen aspectos que tienen exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter progresivo. En tal sentido, en relación con los primeros, los Estados deben adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación, las prestaciones reconocidas para el derecho a la seguridad social. Respecto a los segundos, la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

⁶ Ídem. Párrafo 205.

⁷ Corte IDH. Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404.

⁸ Corte IDH. Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 423.

Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados, siendo así que las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno, resultan fundamentales para alcanzar su efectividad.⁹

Estas consideraciones son de especial relevancia, puesto que sus sentencias son obligatorias para el Estado Mexicano tal como se constata en la Jurisprudencia P./J.21/2014 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I del Libro 5 de abril de 2014, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos."

Ahora bien, y atendiendo a los principios de los derechos humanos en razón de su interdependencia e indivisibilidad, el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos, así como de que no se tomen como elementos aislados o separados, sino como un conjunto, puede decirse que, al afectarse el derecho a la seguridad social, se afecta de igual manera, al mínimo vital, a la familia, a una jubilación digna, entre otros, toda vez que su salvaguarda depende de la realización de los demás derechos. En razón de este carácter fundamental, el máximo tribunal a nivel regional ha sostenido¹⁰ que no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida, y que este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. En este sentido, una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, es generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona y no producir condiciones que la dificulten o impidan; por esta razón, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna.

Esto se sustenta de manera interna con el pronunciamiento efectuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala lo siguiente:

"Registro digital: 2003350 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Constitucional, Común Tesis: I.4o.A.9 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2254 Tipo: Aislada"

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente: i) universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su

⁹ Corte IDH. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394.

¹⁰ Ídem. Párrafo 266.

naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la "Masacre de Mapiripán vs Colombia") ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los estados de excepción se "suspenden", pues en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario; ii) interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y iii) progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales."

Con todo lo anteriormente manifestado, se tiene que hay una directa afectación a diversos derechos humanos que tienen relación con el derecho a la seguridad social, así como la carga impositiva que se ha puesto a los trabajadores del Estado por los aumentos progresivos que son generados en las cuotas que se prevén y que no se reflejan positivamente en sus prestaciones de jubilación y pensión; puesto que, en la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se menciona que una de las problemáticas que motivan la ley, es la situación que enfrenta el Instituto de Seguridad Social del Estado de Yucatán, respecto a la falta de financiamiento histórico, señalando que se gasta más de lo que se percibe por el concepto de cuotas y aportaciones; por lo que con lo anterior, buscan justificar el aumento del pago de cuotas de un 8% al 15%, lo que es casi el doble de lo que estaba estipulado, y para las entidades públicas, se aumentan las aportaciones de 13.75% al 21.75%, lo que equivale a un aumento del 58.18%, de nueva cuenta se recalca que lo anterior, no necesariamente se traduce en que al final, la pensión que se otorgue a la persona trabajadora aumente en la misma proporción que han ido aumentando sus cuotas, pues como se manifestó en líneas anteriores, estos aumentos van encaminados a poder solventar las pensiones que actualmente se encuentran pagando, además de brindar liquidez al Instituto de Seguridad Social Estatal, para las pensiones futuras, por lo que las personas trabajadoras que se encuentren ingresando estarían cubriendo las necesidades para el pago de las más antiguas.

TERCERO: EL DECRETO IMPUGNADO VIOLA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS CON CRITERIOS OBJETIVOS, Y REALIZAR UN EXAMEN EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL DE LA ENTIDAD, EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN; SOBRE TODO, LA QUE HISTÓRICAMENTE SE UBICA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Tanto el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán como el Congreso del Estado, no realizaron un análisis minucioso y objetivo de las circunstancias y contexto social para justificar la regresión de los derechos implicados en el decreto impugnado, constituyendo así, el incumplimiento de sus obligaciones reconocidas en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1.1, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los numerales 1, 2, 4, 5 y 9 del Protocolo de San Salvador, también conocido como

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano, las obligaciones que en materia de derechos humanos les compete, entre las cuales, es imperioso destacar la prohibición de restricciones, salvo justificación expresa y la progresividad de los derechos humanos. Asimismo, el texto constitucional reconoce el derecho a la seguridad social a través de su artículo 123, en concreto en el apartado B, fracción XI, en donde se establecen los lineamientos generales que debe seguir el Estado para el respeto y garantía de este derecho.

Por su parte, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la obligación de todos los estados de respetar y garantizar todos los derechos humanos reconocidos en el tratado internacional. En cuanto al derecho a la seguridad social, éste es visto a través del artículo 26 de la misma Convención, en donde se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, algo importante, es que este artículo establece de lleno una obligación progresiva hacia los Estados, por lo tanto, el derecho a la seguridad social es reconocido a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como ya se explicó, *supra*, el Estado tiene un deber progresivo en cuanto a sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluso cuando se habla de Derechos Económico Sociales Culturales y Ambientales (en adelante DESCAs) esta obligación es aún más acentuada. Esta progresividad se refiere a que con el paso del tiempo, el Estado debe adoptar medidas que amplíen o mejoren el goce y disfrute de un derecho humano, por lo que estas medidas en ningún caso podrán ser en sentido contrario.

Esto ha sido reconocido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a través de su Primera Sala, indica en términos generales que el principio de progresividad es aquel que ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.¹¹

Para el Alto Tribunal de nuestro país, es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter, tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales.¹² En sentido positivo, derivan para el legislador, la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible, jurídicamente hablando, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.

Ahora bien, la no regresividad no es absoluta, pues de forma excepcional es permitida siempre y cuando exista una justificación plena,¹³ tal como se ha

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015305; Instancia: Primera Sala; Décima Época Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 189; Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.

¹² *Idem*

¹³ Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2015304; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 87/2017 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 188; Tipo: Jurisprudencia

expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano,¹⁴ conlleva una obligación del Estado de generar dicha justificación sobre la medida regresiva.

En ese sentido, la Corte ha dicho que por ejemplo, frente a la falta de recursos, recae en el Estado la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición de la manera más efectiva y eficiente posible, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si:

- a) Se acredita la falta de recursos;
- b) Se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y,
- c) Se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron para tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor.¹⁵

Asimismo, el Tribunal estableció que para justificar las medidas regresivas, estas tienen que superar un **“test de proporcionalidad”**, lo que significa que debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, tal como se ha mencionado de manera reiterada en el presente escrito, esto se sustenta con las tesis que se citan a continuación:

“Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2015133; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a. CXXVI/2017 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 219; Tipo: Aislada.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA REGRESIVA EN LA MATERIA DEPENDE DE QUE SUPERE UN TEST DE PROPORCIONALIDAD. El deber de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de esos derechos. Sin embargo, ese deber tampoco es absoluto, por tanto, cuando una medida resulte regresiva en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, corresponde al Estado justificar con información suficiente y argumentos pertinentes la necesidad de esa medida. En ese sentido, la constitucionalidad de una medida regresiva en materia de los derechos aludidos depende de que supere un test de proporcionalidad, lo que significa que debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.”

“Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2015132; Instancia: Primera Sala; Décima Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a. CXXVII/2017 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 219; Tipo: Aislada.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS MEDIDAS REGRESIVAS DE RESULTADOS Y NORMATIVA. Puede distinguirse entre dos tipos de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales: 1) la de resultados, que se presenta cuando las consecuencias de una política pública empeoran la satisfacción de un derecho social; y, 2) la normativa, cuando una norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social. En ese sentido, para acreditar una regresividad de resultados es necesario demostrar que: i) existe una menor satisfacción generalizada del derecho, ya que como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, los derechos económicos, sociales y culturales tienen una

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE.

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ *Idem.*

dimensión tanto individual como colectiva, por lo que es necesario demostrar que existe una regresión hacia un grupo o una demarcación territorial, siendo insuficiente para ello que sólo se haya afectado a ciertos individuos; ii) los quejosos se encuentran afectados por esa regresión generalizada; y, iii) la medida sea la causa de la regresión de la que se duelen los quejosos. En cambio, para acreditar la regresividad normativa sólo debe demostrarse que algún derecho económico, social o cultural, o alguna prestación de la que eran titulares los quejosos les fue suprimida, limitada o restringida, de conformidad con el contenido de una disposición normativa.”

Es decir, en el presente caso, tanto el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como el H. Congreso del Estado de Yucatán, antes de proponer, aprobar y sancionar la legislación recurrida, debieron encargarse de analizar a profundidad la proporcionalidad de estas medidas, en virtud de que los derechos de seguridad social se verían gravemente restringidos tras la regresión efectuada, pues, es evidente que aumentar las cuotas y aportaciones en materia de seguridad social, así como ampliar el periodo para poder acceder a una pensión digna y justa, y la proporción económica en la que disfrutarían de una pensión o jubilación implican una regresión de los derechos adquiridos de la población trabajadora del Estado.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Acevedo Buendía vs Perú*¹⁶, sostuvo que, si un Estado adopta una medida regresiva, debe realizarse un análisis en función de las circunstancias concretas y de criterios objetivos, por lo que se puede apreciar que en el dictamen del decreto que se impugna, no justifica ni evalúa el contexto de aprovechamiento máximo de los recursos del Estado, como sostuvo también en el caso *Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala*¹⁷.

En la Observación 3 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sentó un criterio por el cual, se pueden adoptar medidas regresivas, señalando en forma textual lo siguiente: “[...] todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto, requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos que se disponga.[...]” “[...] Asimismo, aún en tiempos de limitaciones graves de recursos, causados sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, mediante la adopción de programas de relativo bajo costo[...].”

Asimismo, ha reconocido que en ocasiones los ajustes son inevitables pero deben asegurarse las medidas que se adopten para estabilizar la situación económica, en tal virtud, no deben afectar desproporcionalmente a las personas y grupos de población más desfavorecidos, ni que se cause una reducción de normas de protección social vigentes por debajo de los mínimos básicos, máxime que en estos casos únicamente se pueden aplicar estos criterios de forma temporal, necesaria y proporcional a sus derechos.¹⁸

En este sentido, debemos considerar que la norma afecta al grupo poblacional de las **personas mayores quienes tienen derecho a una protección reforzada, lo que exige la adopción de medidas diferenciadas.**

Como pudo apreciarse, los Estados, antes de tomar una medida regresiva, tienen que realizar un análisis minucioso de ésta y elaborar una justificación que compruebe dicho análisis, sobre todo a través de parámetros como el “Test de proporcionalidad”. Sin embargo, en el presente caso aparentemente eso no sucedió, única y exclusivamente se tomó la decisión de elaborar y aprobar los

¹⁶ Caso *Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198.

¹⁷ Caso *Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359.

¹⁸ Comité Desc, observaciones finales sobre el tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela de 7 de julio de 2015, U.N doc, E/C.12/VEN/CO/3, párrf 6.

incrementos previstos en la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán emitida mediante el Decreto 532/2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha veintiuno de julio del presente año, sin que conste un análisis de proporcionalidad en el proyecto de dictamen, iniciativa, exposición de motivos o en la normativa, donde se justifique si dichos aumentos son constitucionalmente válidos, idóneos, necesarios y estrictamente proporcionales.

Asimismo, tampoco el H. Congreso del Estado de Yucatán realizó un análisis de proporcionalidad sobre la medida aprobada, única y exclusivamente se limitó a aprobar la reforma propuesta por el representante del Ejecutivo, sin cuestionar las situaciones de hecho y de derecho que la normativa por su incorporación al orden jurídico estatal ocasionaba. Ambas autoridades, por ende, violentaron el derecho a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado de Yucatán al incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Para mayor abundamiento, presento un **análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido prima facie del derecho a la seguridad social.**

La moderna teoría de los derechos fundamentales traza una distinción indispensable para entender la forma en la que los tribunales constitucionales suelen hacer el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales a través del principio de proporcionalidad; el alcance del derecho fundamental y la extensión de su protección. De acuerdo con esta distinción, el examen de constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas.

En vista de lo señalado, en una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido prima facie del derecho en cuestión; o bien, si la medida legislativa impugnada limita el derecho fundamental. En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la interpretación de las disposiciones normativas correspondientes; por un lado, la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece; por otro lado, la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar su alcance o contenido prima facie. De esta manera, en esta primera etapa se precisan las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho fundamental en cuestión.

Una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada incide o no en el ámbito de protección *prima facie* del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis.

En una segunda etapa del análisis, debe determinarse si la norma que efectivamente interviene en el contenido prima facie del derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto existe justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Este ejercicio implica que se analice si la intervención legislativa cumple con las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad; una finalidad constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido de la medida.

En primer lugar, debe destacarse que la Constitución Mexicana reconoce una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales puede decirse que los derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado"

están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida.

En este orden de ideas, uno de los bienes más genéricos que se requieren para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la seguridad social. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen este derecho e imponen al Estado la obligación a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen este derecho de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ahora bien, el derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos humanos; en tal sentido, el derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra:

- La falta de ingresos procedentes del trabajo debido a la enfermedad, discapacidad, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar;
- Gastos excesivos de atención de salud; y
- Un apoyo familiar insuficiente, en particular para hijas, hijos y familiares a cargo.

La seguridad social desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social.

Las pensiones sociales son un elemento fundamental del derecho a la seguridad social para las personas de edad cuyo disfrute de los derechos humanos se ve amenazado por falta de una pensión social suficiente. Las mujeres de edad son especialmente vulnerables, viven más tiempo y, a lo largo de su vida, realizan una labor de asistencia, cuidado y en ocasiones de una doble y triple jornada laboral no remunerada que restringe su capacidad de obtener un empleo formal y, por consiguiente, de acceder a la seguridad social contributiva o a salarios decentes. Las políticas sociales y económicas deben corregir este desequilibrio promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres en lugar de ampliar la brecha. El cuidado de niñas y niños, por ejemplo, debe estar garantizado como medida de protección social. El nivel de prestaciones de las pensiones sociales debe garantizar un nivel de vida adecuado, por lo cual a todas luces, la norma que se impugna, carece también de una perspectiva de género.

La protección social es fundamental para que las personas con discapacidad puedan independizarse de sus familias, fomentar su participación social y fortalecer su capacidad de vivir con dignidad. Esta protección puede mejorar la productividad, la empleabilidad y el desarrollo económico de las personas con discapacidad y, por consiguiente, contribuir a la seguridad de sus ingresos.

Siguiendo con este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera, que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de proporcionalidad, así, para que sean constitucionales las intervenciones que se realizan al amparo de los cambios efectuados en la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, éstas deben cumplir con ciertas características: La medida legislativa debe ser idónea para proteger los derechos de terceros y/o el orden público; y no debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada este derecho fundamental, o dicho de otra manera, la medida analizada tiene que superar un examen de proporcionalidad en sentido amplio.

La protección social es esencial para mitigar los efectos negativos del desempleo en las juventudes, crear acceso a la educación superior, facilitar su

transición de la escuela al trabajo y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, asegurando al mismo tiempo un disfrute mínimo de sus derechos económicos y sociales, incluidos sus derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, la educación y la vivienda, entre otros.

DETERMINACIÓN ACERCA DE SI LA NORMA IMPUGNADA SUPERA LAS CUATRO GRADES DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD (CONSTITUCIONALIDAD DE LOS FINES PERSEGUIDOS; IDONEIDAD; NECESIDAD; PROPORCIONALIDAD).

Como se explicó anteriormente, en una segunda etapa del análisis de constitucionalidad debe determinarse si la norma que interviene en el ámbito inicialmente protegido por el derecho fundamental es constitucional. Así, en esta fase del análisis debe examinarse si en el caso concreto, existe una justificación desde el punto de vista constitucional para que la medida legislativa limite el contenido *prima facie* del derecho.

Este ejercicio implica que se establezca si la intervención legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de que se supere esta grada del escrutinio, se analice si la medida supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

En el caso que nos ocupa, es necesario recordar que la medida cuya constitucionalidad se analiza es el “sistema de seguridad social en el Estado de Yucatán” configurado por la ley impugnada.

a).- CONSTITUCIONALIDAD DE LOS FINES PERSEGUIDOS CON LA MEDIDA.

En primer lugar, es preciso identificar los fines que se persiguen con la norma impugnada para posteriormente estar en posibilidad de determinar si resultan constitucionalmente válidos. Esta etapa del análisis presupone el argumento de que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.

Ahora bien, para poder identificar esas finalidades perseguidas por el legislador, puede atenderse a los documentos que informan el proceso legislativo de las disposiciones analizadas o bien a la interpretación de las propias normas combatidas. En el caso concreto, del proceso legislativo para promulgar la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, puede desprenderse que el legislador consideró necesario aumentar los requerimientos para acceder a una pensión en sus diferentes modalidades, así como aumentos en el cobro de cuotas y aportaciones.

En efecto, la expedición de la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán tuvo como propósito reglamentar el derecho a la seguridad social. Al respecto, entre las finalidades previstas en la propia ley se señaló *“garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras con el conocimiento de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y sus afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa en comento, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario”*. De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho objetivo, el legislador consideró necesario aumentar los requisitos para poder acceder a una pensión, así como las cuotas y aportaciones que se pagaban, y por otra parte, reduciendo el disfrute sobre el alcance obtenido por considerar el 85% para el pago de la pensión en relación con el salario regulador, y disminuciones anuales en las pensiones otorgadas a familiares de servidores públicos fallecidos.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la finalidad de la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán es el establecimiento de un sistema renovado de seguridad social, puesto que, de una interpretación sistemática del ordenamiento, se desprende que el legislador tuvo la intención de establecer las condiciones para acceder a los diversos servicios en materia de seguridad social.

Al respecto, es evidente que la seguridad social es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual como una pública o social, por tanto, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin.

En íntima relación con el derecho a la seguridad social se encuentra la protección de la sociedad. Si bien es complicado definir en que consiste este principio constitucional, se trata de un concepto que hace referencia al bienestar de todas las personas en general. Si se entiende de esta manera, no hay duda de que resulta de orden público la persecución de objetivos sociales y colectivos a través de decisiones legislativas. Por lo demás, hay que señalar que la Constitución reconoce como interés legítimo del Estado, la protección del conglomerado social.

Una vez que se ha establecido que la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán vigente tiene una finalidad constitucionalmente válida, corresponde ahora analizar si los cambios efectuados en la normativa para acceder a los diversos tipos de prestaciones sociales, así como los aumentos progresivos en las cuotas y aportaciones, y demás situaciones que se han comentado en líneas anteriores, constituyen una medida idónea para garantizar el derecho a la seguridad social.

b).- IDONEIDAD DE LA MEDIDA

En esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada es un medio adecuado para alcanzar los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación empírica entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. Así, la idoneidad de una medida legislativa debe mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.

Ahora bien, en el caso concreto debe determinarse si la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán constituye una medida idónea para garantizar el derecho a la seguridad social. Sin embargo, antes de llevar a cabo ese escrutinio resulta indispensable realizar algunas consideraciones metodológicas sobre la manera de realizar el examen de idoneidad de la medida.

En primer lugar, cuando en la literatura jurídica se aborda el tema de la idoneidad, en ocasiones suele señalarse que este análisis consiste en determinar si dicha medida efectivamente garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social. Los partidarios de realizar el análisis de idoneidad de la manera antes indicada consideran que la carga y aumento de las cuotas y aportaciones no necesariamente es la manera más eficaz de robustecer el sistema de seguridad social estatal, en tal sentido, no superaría esta grada del examen de proporcionalidad.

En este orden de ideas, aceptar que el análisis debe realizarse de esta manera, conllevaría a declarar la inconstitucionalidad de cualquier aumento u obligación que fuera ineficaz para lograr que el sistema de seguridad social se robusteciera en mayor medida.

En tal sentido, debe precisarse que para superar el examen de idoneidad basta con que dichas afectaciones existan, sin importar el grado o entidad que tengan. Dicho de otra forma, para que los aumentos en los requisitos para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social, así como de los aumentos en cuotas y aportaciones, y demás precisiones, encuentren justificación constitucional desde el punto de vista de la idoneidad de la norma, es necesario mostrar que éstos garantizarán en una mayor medida el derecho de seguridad social. Así, una intervención podrá considerarse idónea si la correlación entre medio y fin es positiva, con independencia de su nivel de eficacia.

De acuerdo con lo anterior, se analiza si existe evidencia empírica que justifique el aumento en la carga de las personas trabajadoras en materia de seguridad social es pertinente para robustecer este derecho, y por ende garantizarlo en una mayor medida de la ya prevista.

En tal virtud, de la revisión de las 31 leyes estatales en materia de seguridad social, se mostró que en su mayoría, éstas se promulgaron inicialmente en los años 80 con excepción de la Ley de Sonora de 1962 y la de Veracruz de 1996. De la revisión de dichas leyes, se identificó que entre 1993 y 2015, preferentemente, fueron objeto de reformas 25 de ellas (80.64%), teniendo entre sus consideraciones y fundamentos que sirvieron de base a las reformas efectuadas, problemas de viabilidad financiera de los sistemas de pensiones derivado de condiciones de acceso simple para tener el derecho a la pensión, aportaciones mínimas, prestaciones generosas, inversión de la pirámide poblacional y el incremento de la esperanza de vida.

El estudio de las leyes estatales que obligan a los pensionados a aportar un porcentaje de su pensión al fondo de pensiones muestra que al reducir éstas los beneficios de las pensiones se apartan de:

- a) Los orígenes y objetivos sociales de las pensiones, por una parte, resolver institucionalmente el retiro de la vida laboral y, por otra, asegurar la estabilidad de ingresos en dicha etapa.
- b) Las tendencias internacionales en la materia.
- c) La Constitución mexicana y las Constituciones estatales en materia de seguridad social, puesto que en ellas no se prevén cargas o descuentos a los pensionados.
- d) Los aspectos importantes para la integración social de las personas mayores, como son los ingresos, los cuales están considerados en la Convención de Derechos de las Personas Mayores.
- e) Del goce de sus derechos humanos mediante la satisfacción de los elementos que integran su nivel de bienestar.
- f) El respeto, garantía y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es o sea parte.

Así, para apoyar lo anterior se realizó una búsqueda de información que permitiera identificar la confrontación entre las leyes estatales con criterios judiciales establecidos. El resultado mostró, que dichas leyes han sido objeto de impugnación a través de la presentación de demandas de amparo, así como la promoción de acciones de inconstitucionalidad, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En específico, han sido impugnadas hasta el momento y cuentan con criterios judiciales las leyes de: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Tlaxcala, cuestionando en todo su proceso legislativo y por el porcentaje obligado a los pensionados). La impugnación a la Ley de Sonora generó muchos antecedentes de inconstitucionalidad en 2012.

Posteriormente, las acciones legales se han fundamentado con base en las reformas constitucionales de fecha 10 de junio de 2011 en materia de derechos

humanos, principalmente, porque la modificación al artículo 1o. constitucional imprimió cambios y avances importantes en el sistema jurídico mexicano al incluir diferentes acciones y obligaciones a la autoridad judicial, administrativa y legislativa, para la protección de las personas. Igualmente, porque los actos de las autoridades y las leyes de rango inferior, para ser válidos deben estar acordes con el conjunto de derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, teniendo como conclusión que las consideraciones manifestadas en la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no es una medida idónea para garantizar el derecho a la seguridad social.

c).- NECESIDAD DE LA MEDIDA.

Una vez analizado el examen de idoneidad, corresponde analizar si la norma impugnada es una medida legislativa necesaria para proteger y garantizar el derecho a la seguridad social, o si, por el contrario, existen medidas alternativas igualmente idóneas que afecten en menor grado el derecho a la seguridad social. Con todo, antes de examinar la citada medida, la Primera Sala estima pertinente hacer algunas precisiones metodológicas sobre la manera en la que se debe realizar el análisis comparativo con otras medidas alternativas en esta grada del test de proporcionalidad.

En este orden de ideas, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios con un grado de idoneidad igual o superior para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si éstas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. El primer aspecto del test de necesidad es de gran complejidad, toda vez que supone hacer un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad y afectación material de su objeto.

De esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir que el juez constitucional analice todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares o bien, las alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. En cualquier caso, conviene aclarar que la comparación entre regulaciones en el marco del análisis de necesidad de una medida cumple la función de acotar el universo de alternativas que el legislador pudo considerar al momento de afectar el derecho en cuestión.

Así, mientras que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán vigente estipula y modifica los requerimientos para acceder a una pensión en sus diversas modalidades, la ley abrogada garantizaba en una mayor medida el acceso a las diversas prestaciones en materia de seguridad social, en ese sentido, la norma impugnada es inconstitucional e inconvencional al sostener que las disposiciones impuestas por la norma impugnada establecen condiciones regresivas y desproporcionadas respecto al fin constitucionalmente válido que persiguen, pues las cargas y requerimientos impuestos a las personas trabajadoras son más extensas de lo necesario, alcanzando supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones anteriormente previstas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal resultan más beneficiosas para el derecho a la seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán constituye una medida innecesaria, toda vez que existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger y garantizar el derecho a la seguridad social con una intervención en el derecho fundamental en un grado

menor. Por lo tanto, este Alto Tribunal debe considerar la norma impugnada como inconstitucional al no superar esta grada del test de proporcionalidad.

d).- PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA.

A lo largo del presente escrutinio constitucional se ha mostrado que, si bien la medida analizada es idónea para proteger y garantizar el derecho a la seguridad social, existen medidas alternativas igualmente idóneas que intervienen el derecho afectado en un menor grado. No obstante, en esta sección, se realizará el examen de proporcionalidad en sentido estricto para evidenciar el desequilibrio entre la intensa afectación al derecho a la seguridad social frente al grado mínimo en que se satisfagan los fines legislativos.

El examen de proporcionalidad en sentido estricto, consiste en realizar un balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. Este análisis requiere comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la medida legislativa examinada frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. Dicho de otra manera, en esta fase del escrutinio se requiere realizar una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se persiguen con los costos que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados.

En primer término, hay que recordar que la norma analizada constituye una intervención al derecho a la seguridad social porque conlleva una interferencia en las modalidades para su disfrute. En este orden de ideas, la medida analizada supone una afectación muy importante al derecho a la seguridad social, toda vez que impide a las personas trabajadoras poder acceder en un lapso de tiempo menor a los beneficios en materia de pensión, y al determinar aumentos en el cobro de cuotas y aportaciones en forma indeterminada al ser progresivos y depender del índice nacional de precios al consumidor; así como la creación de la figura del salario regulador en detrimento de los montos para el disfrute de las prestaciones en materia de seguridad social.

En efecto, resulta evidente que una intervención en un derecho fundamental que aumente los requisitos para su realización será más intensa que una intervención que estipule requisitos menores para el disfrute y ejercicio del derecho que nos ocupa. Desde este punto de vista, la afectación a la seguridad social según lo estipulado en la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán puede calificarse como muy intensa, pues consiste en un aumento desmedido de los requisitos para acceder a los beneficios del derecho a la seguridad social, de tal manera que aumenta en demasía las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho.

Así, desde un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, se observa que se limita severamente el contenido prima facie del derecho a la seguridad social en forma desproporcionada, ya que no garantiza el derecho a una jubilación digna, mínimo vital, y en general, provee de mejores condiciones de vida.

Una vez que se han analizado los beneficios y los costos de la medida, es considerativo que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ocasiona una afectación muy intensa al derecho a la seguridad social en comparación con el grado mínimo de garantía que se pretende alcanzar como se ha manifestado en la exposición de motivos de la normativa impugnada. Adicionalmente, vale la pena señalar que a lo largo del presente escrutinio de constitucionalidad se demostró que existen medidas alternativas que intervienen en un menor grado el derecho a la seguridad social, como lo es la normativa que se abrogó por la expedición de esta nueva ley en materia de seguridad social.

A pesar de que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán supera las dos primeras gradas del examen de proporcionalidad, al al

tener como objetivo *aumentar y fortalecer en el tiempo el sistema de seguridad social del Estado y resulta idónea para alcanzar dichos objetivos*; se considera que se trata de una medida que no sólo es innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en menor grado el derecho a la seguridad social, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección y garantía mínima y regresiva frente a la intensa intervención y afectación al derecho a la seguridad social del servidor público y sus familiares.

Por lo tanto, al haberse demostrado la incompatibilidad de la norma impugnada con el andamiaje constitucional que rige en nuestro país, lo procedente es que se declare su invalidez y sean expulsadas del orden jurídico local.

CUESTIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS

Se hace especial énfasis en que los argumentos manifestados por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán sustentan la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas, por lo que se solicita atentamente que, de ser tildadas de inconstitucionales, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45 segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se solicita a este Máximo Tribunal, de estimarlo procedente, vincule al Congreso del Estado de Yucatán a que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido que incurran en la inconstitucionalidad alegada.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 y 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **OFREZCO LAS SIGUIENTES PRUEBAS Y ANEXOS** para reforzar lo planteado en la presente acción y para el caso que sea necesario el perfeccionamiento de alguna prueba en las etapas de audiencia.

P R U E B A S

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Copia certificada de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, por la cual se nombra al C. MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como copia simple de la identificación para votar con fotografía del Instituto Nacional Electoral.

Desde este momento, con fundamento en el artículo 280 primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en términos del artículo 1º, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que en el acuerdo de admisión, se ordene la devolución de dicha documental; y que en sustitución de la misma, se deje en autos, copia cotejada por el Secretario que corresponda, toda vez que el documento antes descrito es de utilidad para los fines que persigue este Organismo Constitucional.

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia simple del Decreto 532/2022 por el que se expide y aprueba la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha veintiuno de julio del año dos mil veintidós, el cual puede ser consultado en [2022-07-21_2.pdf \(yucatan.gob.mx\)](#)

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Diario de los Debates y acta de la sesión del pleno en la que se aprobó el decreto impugnado, el cual pido

de la manera más atenta, sea solicitado al H. Congreso del Estado, junto con su informe justificado.

4. PRUEBA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS: Consistente en un disco compacto, mismo que contiene la versión electrónica del presente escrito.

5.- PRUEBA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Misma que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones, diligencias, autos y constancias que integren este expediente, en todo y en cuanto estas beneficien los intereses del suscrito para el debido cauce legal de la acción de inconstitucionalidad que se presenta.

6.- PRUEBA DE PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Consistente en todo y cuanto puedan beneficiar los intereses del suscrito, siendo que con las mismas se pretende acreditar y robustecer la procedencia de la acción interpuesta.

Por lo antes expuesto y fundado, a ustedes, **Ministros Integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, atentamente pido:

PRIMERO.- Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad que promuevo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la presente demanda de acción de inconstitucionalidad en los términos expuestos.

TERCERO. - En el momento procesal oportuno, declarar fundado el concepto de invalidez, y la constitucionalidad e inconvencionalidad de la norma impugnada.

Protesto lo necesario en la ciudad de Mérida, Yucatán a 22 de agosto del año dos mil veintidós.



M.D. MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE YUCATÁN.**

014583

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 AGO 30 PM 1 09

OFICINA DE IDENTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por correo en (28) Folios
cont:

- Imposición a color de Caudencial para votar en (1) Folio
- Copia certificada de diario oficial del gobierno del estado de YUCATÁN del 17 de diciembre de 2018 en (18) folios según su certificación
- Imposición de diario oficial del gobierno del estado de YUCATÁN del 21 de Julio de 2022 en (64) páginas según su último folio
- Así como (4) traslados.

En el sobre que se agrega

VICTOR HERNANDEZ
VICTOR HERNANDEZ